Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a **veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro**.

**Visto** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **06474/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **un particular que no proporcionó nombre o seudónimo,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte del **Consejería Jurídica,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **siete de octubre de** **dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **00230/CJ/IP/2024,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“EL SUELDO DE LOS OFICILES DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO ASI COMO QUIEN LES PAGA.” (Sic)*

**Modalidad de Entrega:** A través del **SAIMEX**

**2. Respuesta.** El **dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:*

*En caso de que la respuesta no sea legible, favor de comunicarse al teléfono 722 213 75 11, exts: 106 y 110*

*ATENTAMENTE*

*LIC. MARIO CARLOS CANTÚ ESPARZA”*

**Archivos adjuntos:**

* ***RPTA.230.RC.pdf:***
* Oficio número 00230/CJ/IP/2024 de fecha diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica mediante el cual informó que la solicitud fue turnada a la Servidora Pública Habilitada de la Dirección General del Registro Civil, quien emite respuesta a través del oficio número 23301001ª000000/2489/2024, mismo que se adjunta al presente.

No omite mencionar que, los Oficiales del Registro Civil, tienen una relación laboral con el Ayuntamiento al que están adscritos, dado que son estos Sujetos Obligados quienes determinan sus emolumentos.

* Oficio número 23301001ª000000/2489/2024 de fecha catorce de octubre de dos mil veinticuatro, signado por la Directora General del Registro Civil del Estado de México, mediante el cual informó que no se cuenta con el dato respecto a los sueldos de los oficiales del Registro Civil, ya que dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto de las Oficialías, artículo 16 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**a) Acto impugnado:**

*“no quieren mandar la informacion del sueldo que se les da a los oficialies del Registro civil a si como el recibo de nomina de ellos” (Sic)*

**b) Razones o motivos de inconformidad**:

“*no quieren mandar la informacion del sueldo que se les da a los oficialies del Registro civil a si como el recibo de nomina de ellos” (Sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Muncipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones e Informe Justificado**. De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierte que durante el periodo de manifestaciones el **Recurrente** fue omiso en remitir documento alguno, mientras que el **Sujeto Obligado,** en fecha **treinta de octubre de dos mil veinticuatro,** hizo entrega del siguiente archivo electrónico:

* ***INFORME.JUST.230.pdf***: Documento elaborado de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinticuatro, signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual reitera que todo el personal de las Oficialías para el registro del estado civil de las personas, de conformidad a su condición laboral y administrativa, es remunerado con recurso público municipal; en tal virtud, se consideran, en el orden jurídico administrativo, como integrante de la administración pública municipal; por lo que consecuentemente son, en forma exclusiva, servidores públicos de ese ámbito.

Asimismo, señaló que el Recurrente amplió su solicitud original, lo que se actualiza en una improcedencia de conformidad con el artículo 191 fracción VII de la Ley de la materia; por lo que solicitó sobreseer el recurso.

Documento que fue puesto a la vista de la parte **Recurrente**, en fecha **trece de noviembre de dos mil veinticuatro**; no obstante, fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**7. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **veintiuno de noviembre de dos mil veinticuatro,** la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el **dieciocho de octubre** **de dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **dieciocho de octubre** **de dos mil veinticuatro,** esto es, el mismo día hábil al que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada.

Sin que contraríe a lo anterior, el artículo 178 en análisis, refiere que el plazo de quince días hábiles se contará a partir del día siguiente de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la resolución materia de impugnación, ya que ello debe entenderse para el efecto de que transcurrido dicho plazo ya no podrá presentarse el medio de impugnación o si es que se presenta, el mismo se considerará extemporáneo, no así cuando el medio de defensa se interponga antes de que comience a correr el plazo legal; tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª. /J.41/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Décima época que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO****.*

*“Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Es de suma importancia mencionar que, si bien la parte no proporcionó algún nombre para ser identificado como se advierte en el detalle de seguimiento del **SAIMEX**, no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"Las solicitudes* ***anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción I del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I. La negativa a la información solicitada;”***

*(Énfasis añadido)*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de **la parte** **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

*(Énfasis añadido)*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. **El sueldo de los oficiales del registro civil del Estado de México; así como, quien les paga.**

En respuesta, el **Sujeto Obligado** por conducto de la **Directora General del Registro Civil,** informó que no cuenta con el dato respecto a los sueldos de los oficiales del Registro Civil, ya que dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General, lo anterior de conformidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México.

Por su parte, la Unidad de Transparencia informó que los Oficiales del Registro Civil, tienen una relación laboral con el Ayuntamiento al que están adscritos, dado que son estos Sujetos Obligados quienes determinan sus emolumentos.

Conocida la respuesta por la persona solicitante, al no estar conforme con los términos de la misma, interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, mediante el cual se inconformó por la falta de entrega de la información y solicitando la entrega de los recibos de nómina.

Admitido el presente recurso de revisión, en términos del artículo 185 fracción II[[1]](#footnote-0) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se integró el expediente y se puso a disposición de las partes para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, teniendo así que el **Sujeto Obligado** mediante informe justificado ratifico que todo el personal de las Oficialías para el registro del estado civil de las personas, de conformidad a su condición laboral y administrativa, es remunerado con recurso público municipal; en tal virtud, se consideran, en el orden jurídico administrativo, como integrante de la administración pública municipal; por lo que consecuentemente son, en forma exclusiva, servidores públicos de ese ámbito.

Una vez expuestas las posturas de las partes, primeramente es importante recordar que el **Sujeto Obligado** en respuesta informó que los Oficiales del Registro Civil, tienen una relación laboral con el Ayuntamiento al que están adscritos, dado que son estos Sujetos Obligados quienes determinan sus emolumentos.

Aunado a ello informó que no se cuenta con el dato respecto a los sueldos de los oficiales del Registro Civil, ya que dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General.

Al respecto, el Manual General de Organización de la Consejería Jurídica, establece que la Dirección de Registro Civil, tiene como objetivo planear, organizar, coordinar, dirigir y evaluar las acciones y mecanismos para el asentamiento de los actos y hechos del estado civil en el Estado de México, a fin de que se realicen de manera ágil, oportuna y de conformidad con la normatividad vigente en la materia; asimismo, se advierte que cuenta con las siguientes funciones:

*“****227030000 DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL***

*FUNCIONES:*

*- Establecer los planes y programas en materia registral civil, a fin de cumplir eficazmente con la prestación del servicio en la entidad.*

*- Establecer y promover la actualización de los sistemas y procedimientos para la inscripción y registro de los actos y hechos del Registro Civil.*

*- Fomentar la celebración de convenios de coordinación en materia de registro civil, que coadyuven a mejorar los servicios que proporciona la dirección general.*

*- Proporcionar asesoría jurídica, administrativa y técnica a las subdirecciones, oficinas regionales y Oficialías del Registro Civil, cuando así lo soliciten.*

*- Proponer a la Consejería los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas de adscripción de la dirección general y, en su caso, la baja de los mismos.*

*- Solicitar a las unidades administrativas responsables la reposición o, en su caso, la rehabilitación de los libros, actas y documentos deteriorados, destruidos o extraviados, a fin de contar con información veraz en materia de registro civil en la entidad.*

*- Autorizar los Libros del Registro Civil con firma autógrafa por medio electrónico o facsimilar, así como verificar que se precise el nombre del municipio, número de oficialía, acto, volumen, número de actas contenidas y el año de emisión.*

*- Autorizar y ordenar la impresión y distribución de los formatos oficiales en papel seguridad para el asentamiento de los actos y hechos del estado civil, así como para la expedición de copias certificadas de actas.*

*- Celebrar los actos y hechos del estado civil de las personas, cuando así se solicite.*

*- Certificar las actas del Registro Civil, mediante firma autógrafa o electrónica del archivo a su cargo.*

*- Efectuar los cambios de adscripción de los jefes de oficina regional y de los oficiales del registro civil, cuando éstos resulten convenientes para la prestación del servicio.*

*- Dictar el oficio de continuidad en las solicitudes de divorcio administrativo, así como el acuerdo de corrección de vicios o defectos y registros extemporáneos, de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código Civil del Estado de México y en el Reglamento del Registro Civil del Estado de México.*

*- Nombrar al servidor público encargado de sustituir a los titulares de las unidades administrativas del registro civil, durante sus ausencias e impedimentos.*

*- Formular y desarrollar los estudios sociodemográficos para determinar la necesidad de crear subdirecciones, oficinas regionales y Oficialías del Registro Civil o, en su caso, para reubicar las existentes, desconcentrar el servicio y mejorar la atención a la ciudadanía.*

*- Desarrollar campañas para la regularización del estado civil de las personas, así como difundir los servicios que se proporcionan en este rubro.*

*- Establecer y fijar la jurisdicción de las subdirecciones, oficinas regionales y Oficialías del Registro Civil de nueva creación, para la prestación y desarrollo eficaz de sus funciones.*

*- Verificar que se informe oportunamente a la Secretaría de Gobernación sobre los actos y hechos del estado civil en los que intervengan extranjeros, conforme a la legislación aplicable vigente.*

*- Verificar la realización de la evaluación del desempeño de los servidores públicos del registro civil, así como formular y emitir, en su caso, la denuncia correspondiente cuando incurran en alguna falta u omisión.*

*- Elaborar y presentar a la Consejería Jurídica el informe mensual de las actividades realizadas, así como los que le requieran eventualmente.*

*- Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.”*

De lo anterior se advierte que si bien es la Unidad Administrativa competente para conocer de temas relacionados con las acciones y mecanismos para el asentamiento de los actos y hechos del estado civil en el Estado de México, lo cierto es que en efecto, no se advierte que dicha Dirección conozca de la información que la parte **Recurrente** desea conocer.

En este tenor, se colige que existe una evidente incompetencia por parte de la **Consejería Jurídica,** como **Sujeto Obligado** para satisfacer lo solicitado, lo anterior es así, toda vez que en el caso particular, no se observa que cuente con alguna atribución de la cual pudiera desprenderse la información relacionada con los sueldos de los Oficiales del Registro Civil del Estado de México, por lo que, se entiende que, el **Sujeto Obligado**, no cuenta con atribuciones, facultades o competencias que se relacionen con la información solicitada por la parte **Recurrente**.

En este sentido, resulta aplicable el criterio 13/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual, para pronta referencia se reproduce a continuación:

***“Incompetencia. La incompetencia implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada****; es decir, se trata de una cuestión de derecho,* ***en tanto que no existan facultades para contar con lo requerido****; por lo que la incompetencia es una cualidad atribuida al sujeto obligado que la declara.”*

Ahora bien, para robustecer lo anterior, el Código Civil del Estado de México en su artículo 3.1 señala que el Registro Civil es la institución de carácter público y de interés social, mediante la cual el Estado, a través del titular y sus oficiales investidos de fe pública, inscribe, registra, autoriza, certifica, da publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas y expide las actas relativas al nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio, defunción, y expedición de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, asimismo, inscribe las resoluciones que la Ley autoriza, en la forma y términos que establezca su Reglamento.

Aunado a ello, señala que las oficialías del Registro Civil dependen administrativamente del Ayuntamiento, y por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas a la Dirección General, para ello el Gobierno del Estado emitirá los Lineamientos Administrativos relativos a los recursos humanos, materiales y financieros, suficientes y oportunos para el buen funcionamiento de las Oficialías y cuando algún Ayuntamiento incumpla con lo ordenado en los Lineamientos, el Gobierno del Estado emitirá Decreto para que la o las Oficialías queden bajo su control.

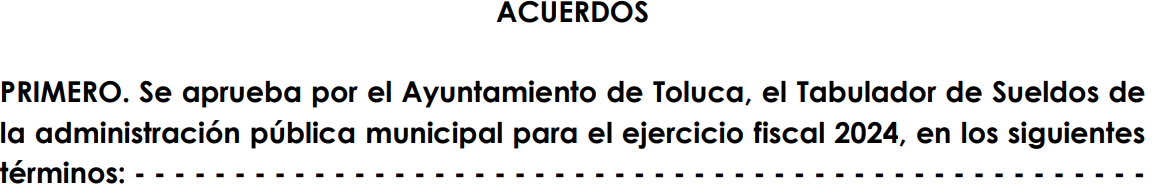
Correlativo a lo anterior, el artículo 15 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de México establece que para el debido cumplimiento de sus funciones, el Registro Civil contará con las oficialías necesarias en el Estado de México, de acuerdo con la situación sociodemográfica de cada municipio, de conformidad con los ordenamientos jurídicos correspondientes.

Por su parte el artículo 16, del citado Reglamento señala que las Oficialías estarán a cargo de una persona Oficial quien será nombrada por la persona titular de la Subsecretaría de Justicia, misma que para el mejor desempeño de sus funciones se auxiliará de personas servidoras públicas municipales.

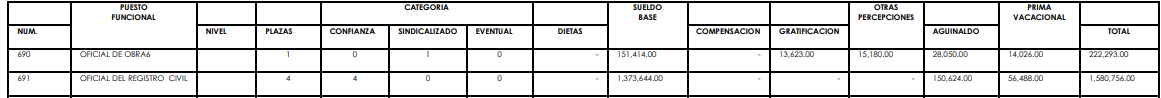
Asimismo, señala que **las oficialías del Registro Civil dependen administrativamente del Ayuntamiento**, y por cuanto a sus funciones, atribuciones y obligaciones están adscritas al Gobierno del Estado de México, a través de la Dirección General del Registro Civil del Estado de México.

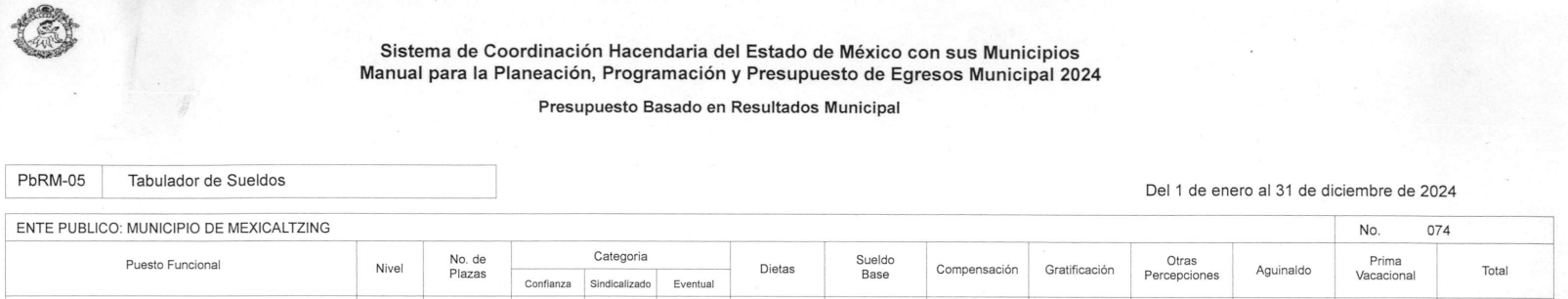
De la normativa insertada con anterioridad, se acredita que el **Sujeto Obligado**, efectivamente no genera, posee o administra, dentro de sus archivos la información requerida en el presente asunto, toda vez que los oficiales del Registro Civil depende directamente de los Ayuntamientos, entendiéndose que su sueldo es remunerado con recursos públicos municipales, toda vez que forman parte de la administración pública municipal; por lo que consecuentemente son, en forma exclusiva, servidores públicos de ese ámbito.

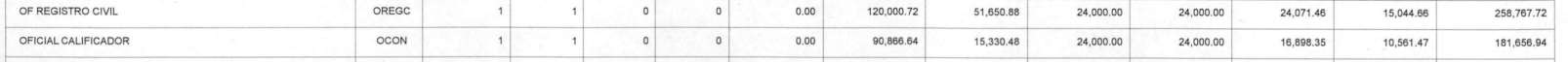
No obstante, para dar mayor certeza a la parte **Recurrente** de la incompetencia del **Sujeto Obligado** para conocer los sueldos de los oficiales del Registro Civil del Estado de México, este Organismo Garante encontró a manera de ejemplo el Tabulador de Sueldos de los Ayuntamientos de Toluca y Mexicaltzingo, en el que se advierte que tal y como lo refiere el **Sujeto Obligado** tanto en respuesta como en Informe Justificado, los Oficiales del Registro Civil forman parte de la nómina de los Ayuntamientos:



…







De lo anterior, se reitera que la autoridad competente para conocer de la información relacionada con los sueldos de los oficiales del Registro Civil del Estado de México, es de competencia municipal.

Atento a las consideraciones expuestas, no es procedente la entrega de información alguna para atender la solicitud de información, bajo la premisa de que los Sujetos Obligados sólo deben proporcionar aquella información que hubieran generado en el ejercicio de sus atribuciones y que obre en sus archivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos, en consecuencia, el pronunciamiento vertido por el Titular de la Unidad de Transparencia y la Directora General del Registro Civil del Estado de México, es suficiente para tener por atendidos los requerimientos de información.

De tal forma que, respecto a la Declaración de Incompetencia la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece, en los artículos 49, fracción II y 167, lo siguiente:

*“****Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***...***

***II.*** ***Confirmar, modificar o revocar*** *las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información* ***y declaración*** *de inexistencia o* ***de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;***

***...***

***Artículo 167****.* ***Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia*** *por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y,* ***en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.”***

De los preceptos citados se desprende que es atribución del Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar, en su caso, la declaración de incompetencia, **en aquellos casos en los que no se trate de una notoria incompetencia.**

Puesto que la Ley también prevé que dicho acuerdo no es necesario cuando la Unidad de Transparencia determine que la incompetencia es notoria dando un plazo de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento del particular, por lo que si bien, en el caso particular, no fue respetado dicho plazo, ello no cambia la circunstancia de que la incompetencia del sujeto obligado para dar atención a la solicitud de información siga siendo notoria.

En otras palabras, la Ley de la Materia confiere a las Unidades de Transparencia la posibilidad de notificar la incompetencia cuando esta sea notoria, siendo innecesario que dicha circunstancia sea sometida a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia para su aprobación.

Como sustento de lo anterior, resulta aplicable el Criterio 20/20, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“Declaración de incompetencia por parte del Comité, cuando no sea notoria o manifiesta.*** *Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, ésta debe ser declarada por el Comité de Transparencia.”*

De igual manera, el Pleno de este Instituto, a través del Criterio 02/04 emitido en la Segunda Época, precisa los alcances del artículo 167 de la Ley de Transparencia, al señalar que corresponde al Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, refiriéndose a aquellos casos en los que exista **duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información**, como se lee enseguida:

***“DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARLA POR ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.*** *De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, las Unidades de Transparencia tienen la facultad de determinar la notoria incompetencia para atender las solicitudes de acceso a la información y comunicarla al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la misma, así como en su caso, orientar al particular sobre el o los Sujetos Obligados competentes para su atención. No obstante, es importante resaltar que* ***al ejercer el derecho de acceso a la información pública cabe la posibilidad de que existan atribuciones concurrentes entre dos o más Sujetos Obligados que impiden determinar dentro del término legal de tres días hábiles, si se posee o no la información por el Sujeto Obligado requerid****o; en virtud de ello, en aras de disipar toda duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información, el Sujeto Obligado deberá dar el trámite correspondiente a la solicitud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las facultades, competencias o funciones de cada una de las Unidades Administrativas que lo integran y, si posterior a ello, se corrobora la incompetencia para la atención del requerimiento, en razón de que es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia Local, al ser este el acto jurídico idóneo que genera seguridad jurídica de que el Ente ante quien se presentó la solicitud, carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requerida; lo anterior, sin perjuicio de que pueda gestionar la colaboración de otro Sujeto Obligado competente para atender la solicitud.”*

Es así que, ordenar al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado que sesione para que emita un acuerdo en el que confirme la declaratoria de incompetencia para garantizar el derecho de la parte **Recurrente**, dilata los plazos del procedimiento, genera una carga adicional al Sujeto Obligado, y **ello no modifica el hecho de que la parte Recurrente no obtendrá la información que es de su interés por esta vía.**

Por ello, instruir al Comité de Transparencia para que sesione y emita una resolución en la que se confirme una notoria incompetencia que ya fue declarada por el Sujeto Obligado y analizada por este Organismo Garante, se aparta de los principios de sencillez y rapidez establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en sus artículos 2, fracciones II y III, 21 y 150.

Es por lo que, pese a que la Consejería Jurídica declinó su competencia respecto a la información relacionada con el sueldo de los oficiales del registro civil del Estado de México, también lo es que, en el caso particular no resulta dable ordenar el acuerdo que declare formalmente la incompetencia del **Sujeto Obligado** pues como se advirtió del estudio la incompetencia resulta notaria.

Ahora bien, resulta necesario precisar al **Sujeto Obligado** que, el hecho de notificar a las personas solicitantes sobre la incompetencia cuando esta sea notoria, dentro del plazo de tres días siguientes a partir de la recepción de las solicitudes, permite que estas puedan presentar sin mayor dilación sus requerimientos de información ante los Sujetos Obligados competentes con la finalidad de obtener la información que es de su interés.

Es por ello que resulta de suma importancia que las Unidades de Transparencia, cuando adviertan que dicho supuesto se actualiza, se ciñan al plazo que la normativa establece, a fin de ajustarse al principio de expeditez que en todo procedimiento en materia de transparencia se debe observar.

En conclusión, cuando se advierta una notoria incompetencia respecto de la información solicitada por un particular, el **Sujeto Obligado** **debe atender los plazos establecidos por la norma para declarar la incompetencia** para entregar información, con el propósito de que los particulares puedan acudir ante las instancias correspondientes para formular las solicitudes que estimen pertinentes.

En ese entendido, se determina que toda vez que el **Sujeto Obligado** declaró su incompetencia y de este estudio se concluyó que la incompetencia resulta notoria, los agravios hechos valer por este devienen **Infundados** y, por lo tanto, resulta procedente **CONFIRMAR** la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, en términos de la fracción II del artículo 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Finalmente, no escapa de la óptica de este Organismo Garante que la parte **Recurrente** al momento de interponer el recurso de revisión de mérito, manifestó: ***“****…* ***a si como el recibo de nomina de ellos****”;* sin embargo, de dicho pronunciamiento se desprende que la persona solicitante pretendió ampliar su solicitud, es decir, lo precisado no fue requerido en un primer momento en dichos términos, toda vez que se advierte que al momento de presentar su solicitud de información, este requerimiento, no formaba parte; por lo que, no es motivo de análisis en el presente estudio. En este sentido, dichos pronunciamientos se traducen como una *plus petitio****,*** y por tanto inatendibles a través del recurso de revisión.

En este orden de ideas, una vez formulada su solicitud inicial,los particulares no pueden modificarla o ampliarla a través de posteriores promociones o en el momento de ingresar su recurso de revisión y menos aún si les fue otorgada la oportunidad para su ampliación, por tanto, la materia de las solicitudes de información se circunscribe a que se permita el acceso a los documentos inicialmente solicitados y en su caso a los aclarados o corregidos.

Robustece lo anterior lo plasmado en el criterio orientador número 01/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto lo que a continuación se transcribe:

*“****Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a través de la interposición del recurso de revisión.*** *En términos de los artículos 155, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 161, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos casos en que los recurrentes, mediante su recurso de revisión, amplíen los alcances de la solicitud de información inicial, los nuevos contenidos no podrán constituir materia del procedimiento a sustanciarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; actualizándose la hipótesis de improcedencia respectiva****.****”*

No obstante, de lo anterior, se dejan a salvo los derechos de la persona solicitante, para que, en caso de considerar conveniente a sus intereses, el conocer la información que fue señalada, la solicite a través de una nueva solicitud de información ante el **Sujeto Obligado** competente, señalando de manera clara y precisa la información y/o documentación a la que pretende acceder mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E:**

**Primero.** Resultan **infundados** los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el Recurso de Revisión **06474/INFOEM/IP/RR/2024** por lo que, en términos del **Considerando Cuarto** de esta resolución, se **Confirma** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado**.

**Segundo. Notifíquese** vía **Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX)**, al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado; para su conocimiento; lo anterior en términos del artículo 189 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Tercero. Notifíquese** vía **Sistema de Acceso a la Información Mexiquense** (**SAIMEX**) la presente resolución a la parte **Recurrente**, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA CUADRAGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. “**Artículo 185.** El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: (…)

   II. Admitido el recurso de revisión, la o el Comisionado ponente deberá integrar un expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga;” [↑](#footnote-ref-0)